

San Miguel, veintiuno de enero de dos mil veintidós.

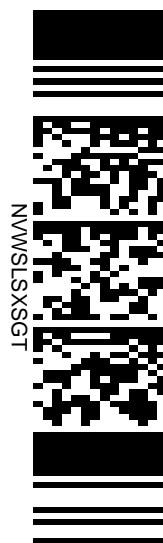
Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en estos antecedentes Rol 551-2021 sobre procedimiento Rit O-116-2021, RUC 21-4-0319855-K, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, por sentencia definitiva de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se rechaza la demanda de reconocimiento de relación laboral, despido improcedente o carente de causal legal, nulidad del despido y cobro de prestaciones, interpuesta por doña Carolina Andrea Salinas Mendoza en contra de la Universidad de Talca, representada legalmente por su Rector don Álvaro Rojas Marín.

Segundo: Que, contra la aludida sentencia, el abogado don Andrés Cáceres Lorca, en representación del demandante, interpuso recurso de nulidad, fundado en la causal contemplada en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es: *"Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior"*.

Sostiene que la sentencia impugnada yerra al calificar los servicios profesionales prestados por la demandante a la demanda como "labores accidentales y no habituales de la institución", de conformidad al artículo 11 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, que permite la contratación a honorarios en tales casos. Al contrario, la demanda debió ser acogida, puesto que se constató la existencia de una prestación de servicios desde el 01 de agosto de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que sí ha existido una habitualidad en la relación entre las partes, y no una contratación puntual para un servicio determinado. La demandante desarrolló labores por la Universidad durante seis años de forma continua y permanente, por lo que no ha sido una relación específica y accidental conforme lo alude la norma referida.

Refiere, por analogía -por tratarse de contrataciones en el ámbito municipal-, a dictámenes de la Contraloría General de la República, en tanto "no puede significar que por la vía de contratar a honorarios, una entidad pública llegue a desarrollar sus labores permanentes (...) corresponde agregar que esta prestación de servicios personales ha de ser de carácter excepcional y eminentemente transitoria, puesto que la condición de cometido específico se pierde con su reiteración en el tiempo, en que pasa



a transformarse en una labor permanente y, por lo tanto, habitual, circunstancia que, en último término, conlleva una desviación de facultades”; por tanto, concluye que si la labor es reiterada en el tiempo, se transforma en una labor permanente, y por tanto, ya no puede ser considerado como un cometido específico.

Añade que las labores docentes y de coordinación académica de programas de responsabilidad social son actividades habituales de la Universidad, y que se encuentra acreditado en el procedimiento, la relación laboral bajo subordinación y dependencia, pues existía la necesidad, de cumplir con asistencia, se contaba con jefatura directa a la que rendir cuentas, existencia de control de horario y evaluación de desempeño.

Luego, de una acertada calificación jurídica de los hechos se colige que en la especie la normativa aplicable no es el Estatuto Administrativo, sino que el Código del Trabajo, máxime si la Ley N° 21.094 sobre universidades estatales, evidencia en su artículo 41, que estas instituciones están autorizadas a contratar bajo las normas del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones, solicita a esta Corte se acoja la nulidad esgrimida y consecuentemente, se anule la sentencia recurrida, y se acoja la demanda impetrada en todas sus partes con costas.

Tercero: Que, en relación con la causal esgrimida, la calificación jurídica de los hechos radica en una operación lógica consistente en verificar en qué medida la situación de hecho concreta corresponde al supuesto legal y que lleva a la aplicación de determinado tratamiento jurídico. Luego, para un mejor análisis de la causal de nulidad alegada, resulta imprescindible traer a colación el sustento fáctico de la sentencia:

- a) Que en la audiencia preparatoria se estableció como hecho no controvertido que la actora prestó servicios para la demandada desde el 01 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, en virtud de cuatro contratos a honorarios (motivo 3°);
- b) Que se pactó una jornada de trabajo de 44 horas semanales (motivo 9°);
- c) Que la demandante se desempeñaba como docente, y también, realizaba la coordinación y gestión del programa de responsabilidad social, perteneciente al programa de formación



fundamental de la Universidad de Talca en la sede Santiago, que se aplica en todas las carreras (motivo 10°);

- d) Que la demandante debía cumplir con un horario determinado, de lunes a viernes presencial, y, que recibía instrucciones de superiores jerárquicos por teléfono, correo electrónico o reuniones por Zoom (motivo 10°);

Cuarto: Que, sobre la base de tales hechos, el tribunal del fondo, en el motivo décimo segundo de la sentencia recurrida, calificó los servicios de la demandante como labores accidentales y no habituales de la institución, consistente, según último contrato de 27 de diciembre de 2019 en: *“Efectuar coordinación de las líneas académicas del Programa de Formación Fundamental en el Campus Santiago. Diseño y confección de instrumentos para el seguimiento y la evaluación del impacto de la línea académica de Responsabilidad Social, Planificación y organización de la docencia (construcción de syllabus, planes de clases, rúbricas y clases). Responsable de la cátedra y de 40 proyectos de servicio solidario, para los alumnos de las carreras de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Administración Pública, Derecho e Ingeniería Comercial. Campus Santiago. (...)”*.

Que la accidentalidad y no habitualidad de las labores las desprende el tribunal *a quo* del hecho de existir un contrato de prestación de servicios a honorarios y boletas de honorarios, pero no explica el por qué subsume las labores realizadas en tal calificación, esto es por qué se pueden calificar de accidentales o de no habituales.

Quinto: Que de lo que se viene colacionando, la causal en estudio, contemplada en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, estima esta Corte, sí se configura en la especie, ya que se hace necesario, sin modificar los hechos probados, una calificación jurídica de las labores prestadas por la demandante a la institución demandada.

En efecto, no se trata de labores accidentales y no habituales de la institución, pues estas son aquellas relacionadas con un cometido específico y para un desempeño que regularmente no se realiza en la institución. Al contrario, en este caso, la demandante no ejerce docencia solo en una cátedra puntual y específica en una carrera, sino que además es responsable de las labores de coordinación de cuarenta proyectos de



servicio solidario que adscriben a cuatro carreras distintas de la Universidad, además del diseño de mecanismos de seguimiento y medición de impacto de los proyectos en la comunidad y la coordinación de las líneas académicas del Programa de Formación Fundamental; todas actividades que no se pueden considerar como no habitual del quehacer universitario, desde que se trata de “vinculación con el medio”, unas de las áreas de desarrollo de las instituciones de educación superior chilenas sometidas a altos estándares de calidad de conformidad a la Ley 20.129 que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos 474, 478 y 482 del Código del Trabajo **se acoge** el recurso de nulidad interpuesto por el abogado don Andrés Cáceres Lorca en representación de la demandante doña Carolina Andrea Salinas Mendoza en contra de la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en la causa Rit O-116-2021, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, que rechazó la demanda de reconocimiento de relación laboral, despido improcedente o carente de causal legal, nulidad del despido y cobro de prestaciones.

Regístrese y devuélvase.

Redactó la abogada integrante Sra. Regina Ingrid Díaz Tolosa.

Rol N° 551-2021–laboral

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros señores Diego Simpertigue Limare y Luis Sepúlveda Coronado, y la abogada integrante señora Regina Ingrid Díaz Tolosa

Se deja constancia que no firman el ministro Diego Simpertigue Limare y la abogada integrante Regina Díaz Tolosa, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por, respectivamente, haber cesado en sus funciones al haber sido nombrado ministro de la Excma. Corte Suprema, y, por encontrarse ausente.



San Miguel, veintiuno de enero de dos mil veintidós.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 478, 482 y 484 del Código del Trabajo, se procede a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Por razones de economía procesal se reproduce la parte expositiva y considerativa de la sentencia anulada, con excepción de los considerandos décimo segundo a décimo sexto, ambos inclusive, que se eliminan.

Y se tiene además presente:

Primero: Que del análisis del artículo 11 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo se colige que es posible la contratación a honorarios de profesionales si las labores a realizar son *“accidentales y que no sean las habituales de la institución”*.

Luego, en el caso particular, actora y demandada acordaron, según último contrato de 27 de diciembre de 2019 las siguientes labores: *“Efectuar coordinación de las líneas académicas del Programa de Formación Fundamental en el Campus Santiago. Diseño y confección de instrumentos para el seguimiento y la evaluación del impacto de la línea académica de Responsabilidad Social, Planificación y organización de la docencia (construcción de syllabus, planes de clases, rúbricas y clases). Responsable de la cátedra y de 40 proyectos de servicio solidario, para los alumnos de las carreras de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Administración Pública, Derecho e Ingeniería Comercial. Campus Santiago. (...)”*.

Por tanto, se aprecia que no se trata de labores accidentales y no habituales de la institución, pues estas son aquellas relacionadas con un cometido específico y para un desempeño que regularmente no se realiza en la institución. Al contrario, en este caso, la demandante es contratada como responsable de un cúmulo de tareas que adscriben a un área del quehacer universitario que normalmente integra la medición de la calidad de la educación superior en Chile, denominada como vinculación con el medio.

Segundo: Que, de conformidad a la Ley 20.129 que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, artículo 17 inciso segundo: *“las instituciones podrán optar por la*



acreditación de otras áreas, tales como la investigación, la docencia de postgrado, y la vinculación con el medio”, y artículo 18 inciso 5° N° 4: “Vinculación con el medio. La institución de educación superior debe contar con políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional con su entorno significativo local, nacional e internacional, y con otras instituciones de educación superior, que aseguren resultados de calidad. Asimismo, deberán incorporarse mecanismos de evaluación de la pertinencia e impacto de las acciones ejecutadas, e indicadores que reflejen los aportes de la institución al desarrollo sustentable de la región y del país”.

Así, se observa que la demandante fue contratada para la realización de múltiples tareas que en su conjunto contribuyen a la vinculación de la institución demandada con la comunidad, lo que a su vez corresponde para la universidad al desarrollo de una línea académica de responsabilidad social, es decir, lo que la norma referida califica como “*mecanismo sistemático de vinculación bidireccional*”, por lo que la calificación de no habitual de las actividades que se desarrollan para conseguir tal objetivo carece de toda lógica. Más aún, si las labores encargadas a la demandante exigían también diseñar mecanismos de seguimiento e impacto de los proyectos que serían implementados y supervisados a su cargo.

Tercero: Que, por otra parte, la accidentalidad y no habitualidad de las labores no es posible desprenderlas solo por el hecho de existir un contrato de prestación de servicios a honorarios y boletas de honorarios, pues no es posible sustraer por las partes una relación laboral amparada por las normas laborales para sujetarse a las normas civiles que hubieran reglado el contrato de prestación de servicios a honorarios, ya que las normas laborales son de derecho público y, por tanto, indisponibles para el trabajador. Si las labores no han sido accidentales y son propias de la entidad para la cual se prestan entonces no es procedente la contratación a honorarios.

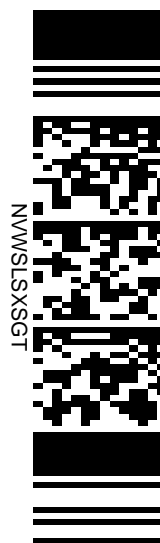
Al contrario, en este caso, la existencia de estos contratos y boletas de forma sucesiva en el tiempo y sin solución de continuidad, abarcando un período que va del 01 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, ambos meses inclusive, abarcando también los meses de enero y febrero de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, muestran que la demandante no ha sido contratada para una labor específica, única o



accidental, sino que se prestaba de manera habitual, extendida en el tiempo y se le pagaba mensualmente por ella, por todo el período que duró la relación laboral, por lo que corresponde aplicar el Código del Trabajo y las normas que rigen tales relaciones, y no el contrato a honorarios suscrito por las partes, por lo que ya desde este punto de vista, corresponderá acogerse la solicitud, en cuanto a la declaración de existencia de relación laboral.

Cuarto: Que, siendo el vínculo existente entre las partes, de orden laboral, sin que pueda ser derrotada tal conclusión con el mérito de las formalidades en que se expresó y consolidó el vínculo examinado, resultan inaplicables entonces las referencias que se hacen en las Resoluciones Exentas N° 4480 de fecha 27 de agosto de 2014, N° 0224 de fecha 13 de enero de 2015, N°1146 de fecha 23 de marzo de 2015, N° 4676 de fecha 09 de diciembre de 2015, N° 0721 de fecha 26 de febrero de 2016, N° 3935 de fecha 28 de septiembre de 2016, N°1585 de fecha 18 de julio de 2017, N°333/854/2018 de fecha 14 de diciembre de 2018, N° 333/1685/2019 de fecha 27 de junio de 2019, y N° 333/2917/2019 de fecha 18 de octubre de 2019 expedidas por la demandada, relativas a no obligarse a mantener la continuidad del servicio convenido ni a pagar imposiciones previsionales, y reservarse el derecho a poner término a la relación laboral en cualquier momento, sin expresión de causa ni derecho a recibir indemnización alguna por parte de la trabajadora.

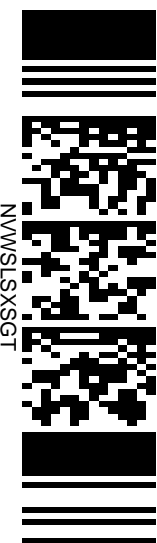
Es consecuencia, y además, en consideración del sustento fáctico de la sentencia del grado en cuanto a que en la audiencia preparatoria se estableció como hecho no controvertido que la actora prestó servicios para la demandada desde el 01 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, en virtud de cuatro contratos a honorarios (motivo 3°); que se pactó una jornada de trabajo de 44 horas semanales (motivo 9°); que la demandante se desempeñaba como docente, y también, realizaba la coordinación y gestión del programa de responsabilidad social, perteneciente al programa de formación fundamental de la Universidad de Talca en la sede Santiago, que se aplica en todas las carreras (motivo 10°); que la demandante debía cumplir con un horario determinado, de lunes a viernes presencial, y, que recibía instrucciones de superiores jerárquicos por teléfono, correo electrónico o reuniones por Zoom (motivo 10°); la correcta calificación jurídica de los hechos es que, al haberse celebrado contratos



consecutivos desde el 01 de agosto del 2014, entre demandante y demandada, existió un contrato de trabajo de duración indefinida a la luz del artículo 159 N° 4 inciso final del Código del Trabajo, por lo que la sola llegada del plazo del último contrato suscrito no es apta para poner fin a la relación laboral.

Quinto: Que, no obstante, el hecho del despido y la causal concurrente es un hecho controvertido por las partes que no se dilucida por el tribunal *a quo*, pues si bien las partes se encuentran contestes respecto de la existencia de una carta de aviso data 26 de noviembre de 2020 en la cual se alude a la llegada del plazo que pone término al último contrato a honorarios, la parte demanda incorpora en probatorio correos electrónicos que muestran un término de la relación laboral por renuncia de la trabajadora en cuanto con fecha 20 de noviembre de 2020 se le ofrece a la actora continuar desempeñándose en la institución para el año 2021 bajo la modalidad de contrata, cuestión que acepta con fecha 16 de diciembre de 2020, pero que en definitiva rechaza con fecha 15 de febrero de 2021, a unos días de haber dado inicio a esta demanda, por lo que no se concluye que el despido de la trabajadora haya sido injustificado, improcedente o carente de causal. La demandada invoca el vencimiento del plazo en el entendido de haber acordado con la actora un contrato a honorarios, en aplicación del artículo 11 del Estatuto Administrativo; la actora, por su parte, no acepta continuar labores con cambio a la modalidad de contratación de honorarios a contrata; por lo que solo cabe desestimar la demanda de despido injustificado, improcedente o carente de causa legal y las indemnizaciones que de ello se hubieran derivado.

Sexto: Que, por otra parte, al declararse la relación laboral habida entre las partes en esta sentencia, es improcedente dar lugar a la nulidad del despido y a las consecuencias que derivan para la demandada, conforme a los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, toda vez que dicha sanción ha sido impuesta en la ley para el empleador que ha efectuado la retención correspondiente a las cotizaciones previsionales de las remuneraciones del trabajador, no enterando esas sumas deducidas ante el organismo respectivo, esto es, sin cumplir su rol de agente intermediario, distrayendo dineros que no le pertenecen, circunstancias que claramente no concurren en la especie, pues la retención que presupone el



mentado precepto nunca se produjo, puesto que la demandada entendía que solo había con la actora un contrato de honorarios, conforme al artículo 11° de la Ley N° 18.834. Esto permite justificar que la demandada solo quede sujeta, con la dictación de la sentencia y en virtud de su naturaleza declarativa, a cubrir las cotizaciones previsionales y de salud durante el tiempo que se extendió el vínculo laboral, no así las obligaciones que surgen con la figura de nulidad del despido, por lo que solo cabe desestimar la demanda de nulidad de despido contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo. Luego, para efecto de las obligaciones y prestaciones derivadas de ellas que se deban dar ha lugar respecto de la relación laboral que se reconoce, es menester señalar que es un hecho no controvertido por las partes que la última remuneración percibida por la actora ascendió a una remuneración bruta de \$1.586.595.- mensual, tal como da cuenta de ello la última boleta de honorario expedida por la actora, y la Resolución universitaria, de fecha 22 de enero de 2020, que aprueba el último contrato de trabajo, aportado por la demandada.

Séptimo: Respecto de la alegación de incompetencia del tribunal efectuada por la demandada en su escrito de contestación, el cuestionamiento a la delimitación de la causa de pedir por la actora, por no precisar claramente el tipo de relación laboral que quiere que se tenga por reconocida, no es óbice para la jurisdicción laboral de cumplir con el mandato constitucional y legal de decidir, en sentencia definitiva, de qué tipo de relación se trata, mediante la aplicación de las normas pertinentes, puesto que sostener que el tribunal carece de jurisdicción para efectuar esa calificación jurídica pugna con lo previsto en el artículo 420 letra a), en relación con el artículo 7°, ambos del Código del Trabajo.

En efecto, la controversia medular trabada entre las partes es, si la relación jurídica entre ambas ha sido una de índole laboral, o si, por el contrario, se encuentra regida por el derecho común por tratarse de una contratación a honorarios, por lo que esta alegación de la parte demandada es desestimada.

Octavo: Respecto de la alegación de prescripción efectuada por la parte demandada en su escrito de contestación, en cuanto sería aplicable respecto de las prestaciones derivadas de las labores efectuadas entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2018, pues no existió reclamo de



la actora en el plazo de dos años desde que los derechos se hicieron exigibles, de conformidad con el artículo 510 del Código del Trabajo.

Es menester puntualizar que la institución de la prescripción se opone al principio del derecho laboral de la irrenunciabilidad; por tanto, la prescripción extintiva debe interpretarse de forma de garantizar al trabajador la más amplia posibilidad de reclamar de sus derechos, así, la fijación del momento de inicio de su cómputo corresponde al término del contrato, y no a su inicio. La prescripción extintiva, si bien es una sanción que se impone al acreedor poco diligente, en el ámbito laboral, tal inactividad encuentra su sentido en la posición desmedrada en que se encuentra el trabajador, quien prefiere evitar conflictos con su empleador a fin de asegurar su continuidad laboral, y suele accionar judicialmente solo al término de la relación laboral.

Luego, demandando la actora se declare la existencia de una relación laboral, su acción prescribe en dos años contados desde el término de las labores, y no desde el inicio de la celebración del primer contrato de honorarios, máxime si ha existido la celebración de cuatro contratos sin solución de continuidad.

En consecuencia, debe entenderse que, el plazo de prescripción de la acción para reclamar el reconocimiento de una relación laboral que ha sido desconocida por el empleador, durante toda su vigencia, sólo puede comenzar a correr desde la época en que se le puso término, según el inciso primero del artículo 510 del cuerpo legal citado, por lo que esta alegación de la parte demandada es desestimada.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1 a 11, 159 a 163, 420 a 432 y siguientes del Código del Trabajo, Ley N° 18.883 y demás normas legales pertinentes ya mencionadas, se resuelve:

I. Que SE RECHAZA LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA interpuesta por la demandada, sin costas.

II. Que SE RECHAZA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION alegada por la demandada, sin costas.

III. Que SE ACOGE PARCIALMENTE la demanda interpuesta por doña Carolina Andrea Salinas Mendoza en contra de la Universidad de Talca, ambas partes ya individualizadas y, en consecuencia, se declara:



Que existió entre las partes una relación laboral entre el 01 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2020, por lo que la demandada deberá pagar a la demandante las siguientes indemnizaciones y prestaciones:

a) \$ 9.519.570.- por concepto de indemnización por años de servicio;
b) \$370.206.- por concepto de feriado proporcional correspondiente a 7 días corridos.

c) Cotizaciones de seguridad social por el periodo agosto de 2014 a diciembre de 2020, para lo cual deberá accionarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 17.322.

IV. Las sumas antes señaladas deberán ser pagadas debidamente reajustadas y con intereses.

V. Se rechaza la demanda en lo demás pedido.

VI. No se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida.

Ejecutoriada que sea la misma, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y remítanse los antecedentes al Tribunal de Cobranzas respectivo para su cumplimiento.

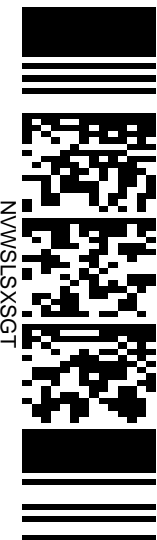
Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Sra. Regina Ingrid Díaz Tolosa.

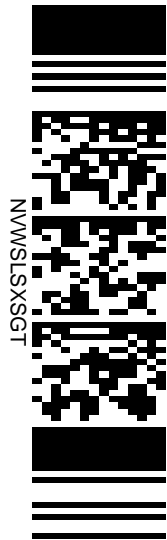
Rol N° 551-2021-laboral

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros señores Diego Simpertigue Limare y Luis Sepúlveda Coronado, y la abogada integrante señora Regina Ingrid Díaz Tolosa.

Se deja constancia que no firman el ministro Diego Simpertigue Limare y la abogada integrante Regina Díaz Tolosa, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por, respectivamente, haber cesado en sus funciones al haber sido nombrado ministro de la Excma. Corte Suprema, y, por encontrarse ausente.

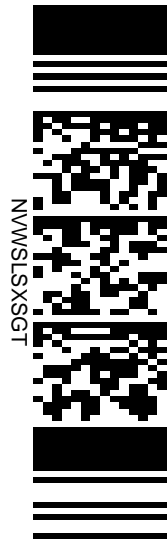


LUIS DANIEL SEPULVEDA
CORONADO
MINISTRO
Fecha: 21/01/2022 13:43:13



Proveído por la Presidenta de la Sexta Sala de la C.A. de San Miguel.

En San miguel, a veintiuno de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



San Miguel, veintisiete de enero de dos mil veintidós.

Al folio 4696:

Vistos:

Atendido el mérito de los antecedentes y los argumentos expuestos por la parte demandada, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 182 del Código de Procedimiento Civil y 432 del Código del Trabajo, ha lugar al recurso de rectificación, aclaración o enmienda deducido respecto del fallo de veintiuno de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, se rectifica la sentencia de reemplazo ya referida, eliminándose del punto resolutivo III la expresión “indemnizaciones y”, además del literal a) del numeral III de lo resolutivo, quedando en consecuencia dicho numeral de la siguiente manera:

“III. Que SE ACOGE PARCIALMENTE la demanda interpuesta por doña Carolina Andrea Salinas Mendoza en contra de la Universidad de Talca, ambas partes ya individualizadas y, en consecuencia, se declara:

Que existió entre las partes una relación laboral entre el 01 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2020, por lo que la demandada deberá pagar a la demandante las siguientes prestaciones:

a) \$370.206.- por concepto de feriado proporcional correspondiente a 7 días corridos.

b) Cotizaciones de seguridad social por el periodo agosto de 2014 a diciembre de 2020, para lo cual deberá accionarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 17.322.”

Sirva la presente resolución como parte integrante de aquélla que rectifica.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°551-2022-Laboral-Cob.

Se deja constancia que no firman el ministro Diego Simpertigue Limare y la abogada integrante Regina Díaz Tolosa, por haber cesado, el primero, en sus funciones al haber sido nombrado ministro de la Excm. Corte Suprema, y por encontrarse ausente la abogada integrante.

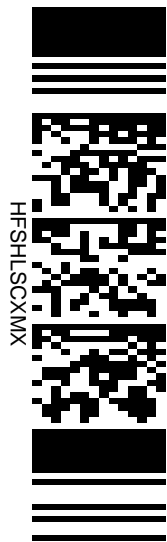


LUIS DANIEL SEPULVEDA
CORONADO
MINISTRO
Fecha: 27/01/2022 15:37:31



Proveído por la Presidenta de la Sexta Sala de la C.A. de San Miguel.

En San miguel, a veintisiete de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.